



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**OIG-IE-20-003**

Departamento de Transportación y Obras Públicas  
(Centro de Servicios al Conductor)

---



19 de mayo de 2020

## Tabla de Contenido

	<b>Página</b>
i. Contenido y Base legal	1
ii. Introducción	1
iii. Resultado de la investigación	1
iv. Conclusión	3
v. Recomendación	4
vi. Aprobación	5
vii. Información General	6

## **I. Contenido y Base Legal**

Resumen Ejecutivo del examen sobre posibles transacciones irregulares relacionadas con la expedición y renovación de licencias de conducir, expedición de tarjetas de identificación y cancelaciones de multas administrativas en la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en el Municipio de Utuado. Esto, en virtud de los Artículos 7, 8, 9 y 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.

## **II. Introducción**

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante, OIG), llevó a cabo un examen sobre posibles transacciones irregulares relacionadas con la expedición y renovación de licencias de conducir, expedición de tarjetas de identificación y cancelaciones de multas administrativas en la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en el Municipio de Utuado.

Del referido realizado por el titular del DTOP y documentos evaluados por la OIG, se identificó que, durante el mes de julio de 2017 hasta julio de 2019, el entonces director del Centro de Servicios al Conductor de Utuado (CESCO), a base de la prueba examinada, existe base para concluir que, utilizó su posición para expedir y renovar licencias de conducir y tarjetas de identificación sin los documentos requeridos y sin el pago de derechos, alterar los documentos sometidos y eliminar multas sin efectuar el pago correspondiente.

## **III. Resultado de la Investigación**

1. En enero de 2017, entró en funciones un nuevo director del Centro de Servicios al Conductor en el Municipio de Utuado (en adelante, exdirector CESCO Utuado).
2. En julio de 2017, un supervisor del Área de Inspección e Investigación del CESCO de Utuado, emitió un comunicado al director ejecutivo de la DISCO, en el que, en síntesis, denunció que el exdirector CESCO Utuado, facilitó servicios a los contribuyentes omitiendo disposiciones reglamentarias y directrices de la agencia. El supervisor alegó el exdirector CESCO Utuado, trató de borrar información para omitir datos por condiciones de salud y de ese modo, poder expedir las licencias o documentos. Se incluyó en dicho comunicado que, los empleados ya habían presentado a la atención del supervisor, quejas de casos mal trabajados y del acoso continuo por parte del exdirector CESCO Utuado, para favorecer a ciudadanos en sus trámites.
3. La Oficina de Investigaciones e Inspección de la DISCO, inició una investigación en abril de 2018, con el propósito de atender varias querellas recibidas de empleados del CESCO,

referentes al exdirector CESCO Utuado. De las entrevistas realizadas al personal del CESCO, se desprende lo siguiente:

- a. Transacciones relacionadas con licencias de conducir y de vehículos efectuadas por el exdirector CESCO Utuado, en las que aparentemente no se seguía el procedimiento establecido y que estaban en incumplimiento con la reglamentación aplicable. Aquellas mencionadas se referían, entre otras, a: corrección y alteración de documentos, tales como, declaraciones juradas y exámenes médicos; emitir licencias y tarjetas de identificación; y la cancelación de multas. Casos que debían pasar por junta médica y que se establecían métodos alternos para evitar la intervención de la junta médica.
  - b. Situaciones de alegado trato hostil a los empleados y otras contrarias al cumplimiento adecuado de la gestión administrativa y operacional del CESCO. Sobre este particular, empleados alegaban que el funcionario no realizaba adecuadamente su función administrativa y que continuamente efectuaba transacciones que le correspondían a un operador. Además, de que permitía, entre otras cosas, que empleados registraran su asistencia y se iban a realizar gestiones personales; el guardia de seguridad estuviera en el área de trabajo y utilizara el equipo de computadoras para hacer transacciones; atendía casos que provenían de otras regiones o pueblos; y no mantenía un debido control del salón utilizado para dar el examen práctico.
4. Se encontró que, entre julio de 2017 a septiembre de 2018, el exdirector de CESCO Utuado, pudo haber alterado tres declaraciones juradas y un certificado médico de solicitantes de licencias de conducir.
  5. El exdirector CESCO Utuado pudo haber cancelado en el Sistema DAVID+, 1 boleto de multas sin efectuar el pago a dos solicitantes de renovación de licencia de conducir.
  6. De los documentos evaluados se desprende que en agosto de 2018, una solicitante requirió una renovación de licencia de conducir y que el exdirector CESCO Utuado pudo haber eliminado al menos, tres multas del sistema DAVID+ de \$50 cada una, sin incluir los intereses y penalidades.
  7. En septiembre de 2018, un solicitante gestionó un duplicado de licencia de conducir. Durante el proceso de expedir el duplicado el exdirector CESCO Utuado, pudo haber eliminado al menos tres multas por las cantidades de \$105, \$120 y \$250.
  8. El exdirector CESCO Utuado, pudo haber expedido una licencia de conducir, dos duplicados y 5 renovaciones de licencias sin los documentos requeridos para cada transacción. Además, pudo haber emitido una tarjeta de identificación sin validar o completar la información requerida. De las transacciones evaluadas se desprende que pudieron haber ocurrido las siguientes irregularidades.

- a. En junio de 2018, un ciudadano solicitó expedir su licencia de conducir. En el Sistema DAVID+ aparecía una nota, de una transacción anterior, en el expediente electrónico donde indicaba que se emitía una licencia provisional por un mes hasta que presentara su tarjeta de seguro social en original. No obstante, se expide la licencia de conducir por 6 años sin solicitar la presentación de la tarjeta de seguro social original.
- b. En julio de 2019, un ciudadano solicitó un duplicado de la licencia de conducir extraviada con una declaración jurada del estado de Pennsylvania y autoriza a su mamá a gestionar el duplicado. Se expidió el duplicado sin escanear en el expediente electrónico de DAVID+ la solicitud, parte médica, identificación de la persona autorizada para gestionar el duplicado, en este caso de la mamá, ni el seguro social que adeudaba de la expedición de la licencia.
- c. En septiembre de 2018, un ciudadano solicita un duplicado de licencia de conducir que estaba pendiente a suspensión por tener 27 puntos, por lo que procedía la notificación de una suspensión de licencias, tramitar el duplicado, pero no entregarlo hasta tanto se completara la suspensión. Además, debía actualizar la información médica. No obstante, se emitió el duplicado sin cumplir con los requisitos establecidos.
- d. En agosto de 2017, se emite una tarjeta de identificación donde los apellidos del certificado de nacimiento no concuerdan con el apellido que aparece en la tarjeta de seguro social. La foto en el Sistema DAVID+ aparenta ser tomada de una fotografía. Era necesario validar la procedencia del apellido.
- e. En seis transacciones de renovación de licencia de conducir realizadas, entre agosto de 2017 a octubre de 2018, no se encontraron documentos requeridos para emitir la misma.

#### **IV. Conclusión**

La evaluación realizada a los documentos, y la información recopilada durante nuestro examen, es relevante, significativa y suficiente para fundamentar las posibles irregularidades en transacciones relacionadas con licencias de conducir, tarjetas de identificación y multas administrativas, que fueron descritas en el referido que el secretario del DTOP realizó a la OIG.

Conforme a la prueba que obra en el expediente, el exdirector del CESCO Utuado, pudo haber cometido, entre otras, posibles violaciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como "*Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico*", delitos tipificados en Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "*Código Penal de Puerto Rico*", y a la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como "*Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico*", por lo que la OIG realiza los respectivos referidos.

## V. Recomendación

### **Al secretario del Departamento Transportación y Obras Públicas**

1. Que imparta instrucciones a la directora ejecutiva del DISCO para que:
  - a. Someter carta a los solicitantes requiriendo su comparecencia al CESCO en un período razonable para presentar los documentos requeridos que no fueron sometidos al momento de la emisión y/o renovación de licencia de conducir o tarjeta de identificación y cualquier otra información necesaria para validar la identidad de los solicitantes. Del solicitante no comparecer con los documentos someter al secretario un listado de los solicitantes para que proceda a suspender o revocar las certificaciones de licencia de conducir o tarjetas de identificación conforme a lo establecido en el Artículo XVI del Reglamento Núm. 8490.
  - b. Llevar a cabo una evaluación exhaustiva que permita establecer controles internos robustos, de forma que funcionarios nombrados en puestos de directores de los centros de servicios al conductor, no tengan accesos a los sistemas mecanizados, entre otros el sistema DAVID+, para realizar transacciones y operaciones rutinarias que le corresponden al personal técnico que labora en los mismos. Las funciones de los directores de los centros de servicios al conductor deben centrarse, entre otras, en la dirección, coordinación y supervisión de las actividades administrativas y operacionales de éstos y en la asesoría y orientación a los supervisores, empleados y público que los visita.
  - c. Adiestre al personal de confianza y personal de nuevo ingreso y se mantenga evidencia del mismo, sobre la reglamentación y leyes aplicables y las penalidades que puedan aplicarse en caso de incumplir con las mismas.
  - d. Informe periódicamente a la Inspector General de la OIG, el estatus de las investigaciones que realizan la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre el referido de las irregularidades en transacciones relacionadas con licencias de conducir, tarjetas de identificación y multas administrativas realizadas por el exdirector CESCO Utuado. Además de los resultados obtenidos y las acciones administrativas, civiles y criminales, si alguna, que se tomen contra el funcionario, como parte de las determinaciones que se adopten de las investigaciones realizadas por estas entidades gubernamentales fiscalizadoras.
  - e. Tomar las determinaciones disciplinarias que correspondan conforme al Reglamento de Recursos Humanos de la entidad.<sup>4</sup>

### **A la secretaria del Departamento de Justicia**

---

<sup>4</sup> Art. 17 (d) Ley Núm. 15-2017, según enmendada.

- f. Evaluar el contenido de este informe sobre posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico y otras leyes aplicables para tomar las medidas que en derecho procedan.

**Al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental**

- g. Evaluar el contenido de este informe sobre posibles violaciones a su Ley Habilitadora y tomar las medidas que en derecho procedan.

**VI. Aprobación**

El presente informe se emite en virtud de los poderes y facultades conferidos bajo la Ley Núm. 15- 2017, supra. Será responsabilidad de los funcionarios, empleados o cuerpo rector del Gobierno de cada entidad gubernamental, observar y velar por que se cumpla cabalmente con la política pública. De la misma manera, establecer los controles y mecanismos adecuados para garantizar su cumplimiento. Será el deber, además, de cada uno de estos y de los demás funcionarios y servidores públicos, el poner en vigor las normas, prácticas y estándares que promulgue la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, así como de las recomendaciones, medidas y planes de acción correctiva que surjan de nuestras evaluaciones.

En cumplimiento con el Artículo 8 Inciso (m) de la Ley Núm. 15-2017, supra, y el Reglamento Núm. 9136 Artículo I, sección 1.5 (e) conocido como “Reglamento para la Publicación de Informes y Asuntos Públicos Rutinarios de la Oficina del Inspector General”, los hallazgos de este informe han sido referidos a entidades de fiscalización federales y/o estatales ante las posibles violaciones a estatutos legales. Los resultados de las auditorías, estudios, exámenes o intervenciones podrán hacerse públicos, a menos que incluyan información que sea confidencial o esté exenta de tener que darse a la luz pública por alguna disposición legal. Por lo que, a tenor con el Artículo 9, de la citada Ley y Reglamento, el contenido total del informe es CONFIDENCIAL a los efectos de no afectar investigaciones futuras, producto de los hallazgos y recomendaciones.

## **VII. Información General**

### **Misión**

Consolidar los recursos y esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para promover una sana administración pública y mediante una preintervención efectiva, el óptimo funcionamiento de sus instituciones.

### **Visión**

Servir como entidad gubernamental reconocida a nivel local e internacional y lograr a través de auditorías internas y acciones preventivas el funcionamiento efectivo y eficiente de los fondos y de la propiedad pública del Gobierno de Puerto Rico.

### **Línea de Consultas**

La Oficina del Inspector General tiene el compromiso de promover una sana administración pública. Por lo que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones de la rama ejecutiva, pueda comunicarse a la OIG a través de:

- Línea de Consultas -787-679-7979
- Correo Electrónico- [informa@oig.pr.gov](mailto:informa@oig.pr.gov)

### **Contactos**



PO box 191733 San Juan, Puerto Rico 00919-1733



Ave Arterial Hostos 249 Esquina Chardón Edificio ACAA Piso 7, San Puerto Rico 00918



787-679-7997



[consultas@oig.pr.gov](mailto:consultas@oig.pr.gov)



[www.oig.pr.gov](http://www.oig.pr.gov)